

Señores,

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO – VALLE DEL CAUCA

j04admcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

ASUNTO: **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1ª INSTANCIA**
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTES: ALEXANDER ZULETA BUSTAMANTE Y OTROS
DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
LL. EN GARANTÍA: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
RADICACIÓN: 76-147-33-33-001-2019-00411-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de la compañía **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, manifiesto que **REASUMO** el poder a mi conferido y encontrándome dentro del término legal, presento los respectivos **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA** dentro del proceso de la referencia, solicitando desde ya que se profiera **SENTENCIA FAVORABLE PARA MI REPRESENTADA**, desestimando las pretensiones de la parte actora y declarando probadas las excepciones propuestas al momento de contestar la demanda y el llamamiento en garantía.

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS

Mediante Auto de Sustanciación No. 476 proferido el 16 de julio de 2025, notificado por estrados en la misma fecha, el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Cartago, resolvió lo siguiente:

“Agotado el recaudo probatorio en los términos que fue ordenado en la presente actuación, sería del caso señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, pero a criterio del despacho ello se hace innecesario, por lo que en virtud de lo establecido por el inciso final del artículo 181 del CPACA, el despacho prescinde de tal audiencia y, en consecuencia, **concede a las partes el término de diez (10) días para que presenten sus alegatos de conclusión.** Vencido el término anterior, el despacho procederá a dictar sentencia.” (negritas y subrayado fuera del texto original).

En ese sentido, los diez (10) días de traslado para alegar de conclusión transcurrieron de la siguiente forma: 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y **30 de julio de 2025**. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los alegatos de conclusión del proceso de la referencia de manera oportuna dentro del término legalmente conferido.

II. PROBLEMA JURÍDICO

El Juzgado Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Cartago, en audiencia inicial del 01 de abril de 2025, fijó el litigio dentro del asunto *sub judice* de la siguiente manera:

“Analizar si el accidente de tránsito ocurrido el 18 de mayo de 2019, en el sector de la vereda El Pedregal, entre los municipios de Toro y La Unión (Valle del Cauca), en el que el señor Alexander Zuleta Bustamante resultó lesionado, fue causado por el presunto mal estado de la vía y la falta de señalización, o si, por el contrario, se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la víctima como argumento para exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, INVÍAS, y a la compañía de seguros llamada en garantía.

De ser probada la falla en el servicio en el cumplimiento de sus obligaciones de la entidad demandada, INVÍAS, determinar si está llamada a responder por los perjuicios morales y materiales reclamados por la parte demandante, así como establecer la concurrencia de la

responsabilidad en el pago por parte de la compañía de seguros MAPFRE llamada en garantía.”

No sobra advertir que la fijación del litigio no se convierte en un obstáculo para el juez al analizar y resolver otros asuntos sometidos a su conocimiento dentro del proceso, así como la declaración de las excepciones que aparezcan probadas dentro del asunto.

Lo anterior en razón de los mandatos contenidos en los artículos 281 del Código General del Proceso y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales exigen al fallador resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento con el fin de que sus decisiones se enmarquen en el principio de congruencia:

“Código General del Proceso. Artículo 281. Congruencias. **La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (...)**”

“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. [...]” (negritas y subrayado fuera del texto original).

De esta forma, se advierte desde ya que las pretensiones del demandante y los problemas jurídicos planteados por el despacho deben ser resueltos de manera negativa, es decir, no le asiste ningún tipo de responsabilidad al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y, por ende, mi representada, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., no debe asumir ningún pago por el supuesto daño que de manera injustificada se le pretende endilgar al extremo pasivo de esta *litis*, por las siguientes razones:

III. TESIS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Las tesis que sostendrá MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. a lo largo de los presentes alegatos de conclusión es que la parte actora no probó los elementos y presupuestos necesarios de la responsabilidad extracontractual de la demandada. Por el contrario, se acreditó que el accidente de tránsito se ocasionó por causas imputables directamente a la víctima Alexander Zuleta Bustamante, pues se encontraba ejerciendo una actividad peligrosa sin la debida diligencia y cuidado, toda vez que incumplió las normas de tránsito al transitar sin licencia de conducción vigente, excediendo el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y sin el debido cuidado que exigían las condiciones climáticas del día de los hechos, situaciones que exoneran de todo tipo de responsabilidad a la entidad demandada. Finalmente, no se acreditó la existencia y monto de los perjuicios materiales e inmateriales solicitados por los demandantes, así como tampoco la legitimación en la causa por activa de los señores CÁNDIDA ROSA HINCAPIÉ, JIMENA PUERTA HINCAPIÉ y YEISON PUERTA HINCAPIÉ.

En subsidio de lo anterior, y en el remoto e hipotético caso de que el despacho acceda a las infundadas pretensiones de la demanda, la tesis de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., frente a su vinculación como llamada en garantía, es que al momento de proferir sentencia, el despacho debe tener en cuenta las condiciones generales y particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201219006213, cuya vigencia corrió desde el 16 de marzo de 2019 hasta el 17 de enero de 2020,

tales como la inexistencia de obligación indemnizatoria al no realizarse el riesgo asegurado en la Póliza, el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro, el límite del valor asegurado, la disponibilidad del valor asegurado la existencia de un deducible a cargo del asegurado, las causales de exclusión de la Póliza en comento, la inexistencia de solidaridad entre el demandado y la aseguradora y el pago por reembolso.

IV. DESARROLLO DE LAS TESIS EXPUESTAS POR MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. – LO PROBADO EN EL PROCESO

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE CÁNDIDA ROSA HINCAPIÉ, JIMENA PUERTA HINCAPIÉ y YEISON PUERTA HINCAPIÉ

Es preciso advertir al despacho que no se acreditó la calidad con la que comparecieron los señores Cándida Rosa Hincapié, Jimena Puerta Hincapié y Yeison Puerta Hincapié al proceso, ya que no se demostró su parentesco con el señor Alexander Zuleta Bustamante, ni tampoco que se traten de terceros afectados por los hechos que se demandan, pues al proceso no se allegaron pruebas documentales o testimoniales que respalden esta situación.

Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de los artículos 211 y 306 de la ley 1437 de 2011, que expresa que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y conforme a esta norma, entonces, quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, ya que la sola afirmación de una parte no es suficiente para acreditarlo.

“Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma, es claro que la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así, la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica de pruebas. Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua.”¹ (Negrillas y subrayado fuera de texto)

Cabe señalar que las declaraciones ante Notario rendidas por las señoras Zoraida Zuleta Bustamante Y Ana Patricia Polo Vásquez, no fueron ratificadas dentro del presente asunto, ni fueron rendidas con comparecencia de la contraparte en el proceso, por lo cual no es procedente conceder valor probatorio a las mismas. Así lo ha determinado el H. Consejo de Estado de manera consistente:

“11. La Sala no podrá conceder valor probatorio a las declaraciones extrajuicio aportadas junto con la presentación de la demanda, rendidas ante la Notaría Primera de Villavicencio por los señores Daniel Orjuela, Bernardo Segura Caicedo, Rafael Antonio Bobadilla y Nubia Carolina Merchán, las cuales tratan sobre las actividades agrícolas y comerciales del demandante y los hechos fundantes de la demanda (f. 159-164 c. 1).

11.1. Estas declaraciones no pueden ser valoradas por la Sala y no serán tenidas en cuenta para acreditar los supuestos fácticos de la petición indemnizatoria de la parte actora, ya que su falta de ratificación al interior de este proceso y su recaudo sin presencia de la parte contra las que se pretenden hacer valer les priva de cualquier valor demostrativo.

11.2. Estos requisitos formales provienen de una interpretación armónica de las normas procesales civiles aplicables a las declaraciones rendidas fuera de un proceso judicial con el

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) **APCM**

objeto de que sean tenidas en cuenta en el mismo, especialmente las contenidas en los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil. (...)

11.6. Esto es así, porque la norma en comento establece que los documentos declarativos que provengan de terceros que se pretendan hacer valer como prueba en un proceso jurisdiccional no requieren ratificación para ser apreciados por el juez, salvo expresa solicitud de la parte contra la que se pretenda hacer valer. **Sin embargo, ello nada tiene que ver con la necesidad de ratificar declaraciones extrajudicio como las presentadas junto a la demanda en esta ocasión.**

11.7. Un adecuado análisis de esta norma revela que **en ella no se incorpora ningún cambio en las normas aplicables a las declaraciones extrajudicio para su valoración en un proceso judicial, ya que en ella el legislador fue claro en el sentido de estarse refiriendo a documentos declarativos y no a declaraciones, piezas probatorias eminentemente diferentes**, aun cuando forzosamente las declaraciones o testimonios de terceros deban estar incorporadas en un instrumento de carácter material, como el acta física levantada durante su recepción, una grabación de audio o un video conservados en forma magnética o digital.

11.7. **Las traídas con la demanda son verdaderas declaraciones rendidas por fuera de este proceso, las cuales por haber sido recibidas sin concurrencia de la contraparte requieren del requisito de la ratificación en este proceso para ser valoradas como prueba. Al no haberse hecho tal ratificación, por las razones ya enunciadas, la Sala las desestimará como elemento de convicción para resolver este caso**² (Negrillas y subrayado fuera del texto original)

En ese sentido, es claro que frente a los señores Cándida Rosa Hincapié, Jimena Puerta Hincapié y Yeison Puerta Hincapié se configura la falta de legitimación por activa, pues no reposa en el plenario prueba alguna que acredite la calidad de con la que se aseveraron comparecer al asunto, ni mucho menos el supuesto parentesco o afinidad con el señor Alexander, por lo que solicito su declaración al momento de proferir sentencia.

2. FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

2.1 SE ACREDITÓ LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CONSTITUYENTE DE UNA CAUSA EXTRAÑA Y EFICIENTE DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

La parte demandante no acreditó que el accidente presentado el día 18 de mayo de 2019 fue consecuencia de un hueco en la vía entre los Municipios de Toro y La Unión (Valle del Cauca), pues las pruebas aportadas y recaudadas no permiten evidenciar en manera alguna esta situación. Por el contrario, el acervo probatorio evidenció que la víctima conducía sin contar con licencia de conducción vigente, como consta en el Registro Único Nacional de Tránsito; excediendo el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo, como confesó en el interrogatorio rendido en estrados y, además, conducía sin el debido cuidado que exigían las condiciones climáticas, como se establece en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C-000945594, que señaló como hipótesis la No. 138, que corresponde a la *“falta de precaución por niebla, lluvia o humo”*. Estas situaciones ocasionaron que el señor Alexander Zuleta Bustamante perdiera el control del vehículo y se produjera el accidente, configurándose la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

Sobre la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el Consejo de Estado en su Sección Tercera, mediante sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744), se ha pronunciado de la siguiente manera:

² CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejo ponente: DANIL ROJAS BETANCOURT Bogotá D.C., Tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 20001-23-31-000-2002-00136-01(32180)

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. **Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)**” (Negrillas fuera del texto original)

En particular, frente al grado de diligencia y cuidado exigido en el ejercicio de actividades peligrosas, indicó:

“Quien conduce debe prever que aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico puede ser evitado con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor”.³ (Negrillas fuera del texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior, los actores de la vía están sujetos a una serie de normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito, como se extrae de su artículo 55°:

“ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y **debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables**, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.” (Negrillas fuera del texto original)

En particular, los conductores están sometidos a obligaciones especiales que se relacionan con la actividad que desempeñan, como las contenidas en el artículo 74° de la norma referida, que establece una serie de situaciones en las que los conductores deberán reducir la velocidad a 30km/h, entre ellas, cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad:

“ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores **deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:**
En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.
En las zonas escolares.
Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.
Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.
En proximidad a una intersección.”

En igual forma, respecto a la licencia de conducción el artículo 18 del Código Nacional de Tránsito establece su naturaleza habilitadora para la conducción de vehículos:

ARTÍCULO 18. FACULTAD DEL TITULAR. La licencia de conducción **habilitará a su titular para conducir vehículos automotores** de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca la reglamentación que adopte el Ministerio de Transporte, estipulando claramente si se trata de un conductor de servicio público o particular. (Negrillas fuera del texto original)

En el presente caso, es posible colegir que el señor Alexander Zuleta Bustamante falló en el deber objetivo de cuidado que exigía el ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción, porque no tuvo la prudencia requerida para transitar con las precauciones exigidas por el Código Nacional de Tránsito al no contar con licencia de conducción vigente y conducir excediendo el límite máximo de velocidad establecido

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernández, en sentencia del 09 de diciembre de 1996, proferida dentro del expediente con radicado No. 9722,

para su vehículo y sin el debido cuidado que exigían las condiciones climáticas, exponiéndose a un riesgo mayúsculo que ocasionó el accidente de tránsito en comento, como pasa a evidenciarse.

Al consultar la cédula del accionante en el Registro Único Nacional de Tránsito, podemos observar que al momento de los hechos, 18 de mayo de 2019, no contaba con licencia de conducción vigente, pues se encontraba vencida desde el 19 de diciembre de 2015:

NOMBRE COMPLETO:	ALEXANDER ZULETA BUSTAMANTE		
DOCUMENTO:	C.C. 16400883	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	5747527
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2010		

Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
16400883	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	07/02/2023	ACTIVA		Ver Detalle
10370033	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	19/12/2012	VENCIDA		Ver Detalle
6778044	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	02/08/2010	INACTIVA		Ver Detalle
76400000013287	STRIA TTO MCPAL LA UNION	04/09/2002	INACTIVA		Ver Detalle

Al revisar el detalle de la licencia de tránsito No. 10370033, el sistema arroja la siguiente información:

NOMBRE COMPLETO:	ALEXANDER ZULETA BUSTAMANTE		
DOCUMENTO:	C.C. 16400883	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	5747527
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2010		

Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
16400883	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	07/02/2023	ACTIVA		Ver Detalle
10370033	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	19/12/2012	VENCIDA		Ver Detalle

Categorías de la licencia Nro: 10370033

Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua
C1	19/12/2012	19/12/2015	

6778044	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	02/08/2010	INACTIVA		Ver Detalle
76400000013287	STRIA TTO MCPAL LA UNION	04/09/2002	INACTIVA		Ver Detalle

Posterior al vencimiento, de su licencia No. 10370033 el 19 de diciembre de 2015; el señor Alexander Zuleta Bustamante se encontró sin licencia de conducción hasta el 2023, año en el cual se expidió la licencia de conducción No. 16400883, como lo indica el sistema al consultar el detalle de esta última:

NOMBRE COMPLETO:	ALEXANDER ZULETA BUSTAMANTE		
DOCUMENTO:	C.C. 16400883	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	5747527
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2010		

Nro. licencia	OT Exped. Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
16400883	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	07/02/2023	ACTIVA		Ver Detalle

Categorías de la licencia Nro: 16400883

Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua
A2	07/02/2023	07/02/2033	
C1	19/12/2012	19/12/2015	
B1	19/12/2012	19/12/2015	

10370033	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	19/12/2012	VENCIDA		Ver Detalle
6778044	INSP TTOyTTE ROLDANILLO	02/08/2010	INACTIVA		Ver Detalle
76400000013287	STRIA TTO MCPAL LA UNION	04/09/2002	INACTIVA		Ver Detalle

De esta información, se tiene que, para el 18 de mayo de 2019, fecha de ocurrencia del accidente de tránsito que motiva este litigio, el señor ZULETA se encontraba sin licencia de conducción vigente, habiéndose vencido la última el 19 de diciembre de 2015; esto es, 3 años 4 meses y 18 días antes del accidente.

Además, se destaca que con las pruebas aportadas por el demandante, no solo se entrega una copia de licencia de conducción en un estado ilegible, sino que en interrogatorio rendido ante el despacho el día 16 de julio de 2025 se evidenció que el señor Alexander Zuleta Bustamante desconocía no solo la categoría de la licencia de tránsito que presuntamente portaba para la fecha de los hechos, sino que la también desconocía su fecha de vencimiento, pues aseveró que vencía en el año 2023, cuando en realidad venció el 19 de diciembre de 2015. De ello se concluye que el demandante no solo conducía en contravención de las normas de Tránsito que le eran exigibles, sino que no era apto para ejercer la conducción de motocicletas.

Por otra parte, en el interrogatorio de parte rendido por el señor Alexander Zuleta Bustamante en audiencia de pruebas celebrada el día 16 de julio de 2025, el actor confesó que el día de los hechos se presentó un "aguacero", que le impidió tener buena visibilidad de la vía. Así mismo confesó que transitaba a una velocidad de máximo 35 Km/h, cuando el artículo 74 previamente transcrito prescribe que cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, esta debe reducirse a máximo 30 km/h, y no 35 k/h. Ello permite evidenciar no solo la falta de conocimiento de las normas de tránsito y su trasgresión por parte del señor Alexander Zuleta, sino la manifiesta imprudencia e impericia del actor, quien con su conducta imprudente ocasionó el accidente que nos convoca.

Cabe destacar en este punto que, si bien la declaración rendida por el demandante en audiencia no puede ser considerada para entender acreditados los hechos de la demanda, por cuanto la demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes, otra consecuencia se predica respecto a los hechos adversos al declarante y que favorezcan a la parte contraria, pues el artículo 191 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 211 de la ley 1437 de 2011, prevé que la declaración de parte podrá ser apreciada como confesión:

"El artículo 191 CGP, aplicable por remisión del artículo 211 CPACA, prevé que la declaración de parte podrá ser apreciada como confesión, es decir, en aquello que le produzca"

consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria cuando reúna los siguientes requisitos: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; (iii) que recaiga sobre hechos frente a los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (iv) que sea expresa, consciente y libre; (v) que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento y (vi) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial o judicial trasladada.”⁴

Adicionalmente, la culpa exclusiva de la víctima como causa determinante del accidente se encuentra acreditada con el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. C-000945594 aportado por la parte actora, en el que la hipótesis que se planteó fue la No. 138 que, de acuerdo a la Resolución No. 0011268 del 6 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, se refiere a la *“falta de precaución por niebla, lluvia o humo”* por parte del conductor. Esta situación, como se ha venido exponiendo, se relaciona con la falta de pericia del conductor quien no contaba con las calidades necesarias para conducir motocicletas y su imprudencia al superar el límite de velocidad con la que debía transitar en esta carretera, ocasionando que perdiera el control de la motocicleta e impactara con la berma de la carretera.

Ello de conformidad con lo contenido en el Informe Fotográfico de Investigador de campo del 18 de mayo de 2019, el cual fue aportado por la parte actora, el sitio de impacto de la moto fue la berma de la carretera, y no un hueco en la vía como lo aseveró la parte demandante:



En este punto se debe destacar que, si bien en audiencia de pruebas celebrada el día 16 de julio de 2025 se recibieron las declaraciones de presuntos testigos presenciales de los hechos y de un presunto acompañante del señor Alexander Zuleta Bustamante, sus dichos son contradictorios entre sí y no guardan relación con los restantes medios de prueba obrantes en el proceso, por lo que no resultan creíbles.

Ello por cuanto el señor Belisario García Sánchez manifestó ser el presunto acompañante del señor Alexander Zuleta Bustamante el día de los hechos, mientras que William Insuasty López y Juan de Dios Agudelo Carvajal manifestaron ser testigos presenciales del momento del accidente, sin embargo, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito aportado con la demanda se indicó claramente que la víctima no se transportaba con pasajeros y que tampoco existieron testigos presenciales de los hechos:

⁴ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-33-000-2020-00044-02(67820) **APCM**

10. TOTAL VICTIMAS:	PEATÓN <input type="checkbox"/>	ACOMPANANTE <input checked="" type="checkbox"/>	PASAJERO <input type="checkbox"/>	CONDUCTOR: 01	TOTAL HERIDOS: 01	MUERTOS: <input type="checkbox"/>
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO						
Vehículo 1 138		DEL VEHICULO DE LA VÍA	DEL PEATÓN DEL PASAJERO			
OTRA: _____ ESPECIFICAR ¿CUÁL?: _____						
12. TESTIGOS						
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO		
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO		
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO		

Así mismo, tampoco quedó constancia de la existencia de pasajeros o testigos presenciales dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía y aportada con el escrito de demanda, como se extrae del Formato Único de noticia criminal FPJ - 2 del día 19 de mayo de 2019 e Informe Ejecutivo FPJ - 3 del 20 de mayo de 2019:

VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES		VICTIMA 1	
VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS		Primer nombre: ALEXANDER	Segundo nombre: BUSTAMANTE
IX. VEHICULOS		Primer apellido: ZULETA	Segundo apellido: BUSTAMANTE
¿El vehículo fue hurtado?	NO	Documento de Identidad C.C. <input checked="" type="checkbox"/> Otra: _____	No. 16400883
Marca: HONDA	Placa: HDR518	País: Colombia	Departamento: _____
Mpdelo: 2007	Clase: FAMILIA	Edad: _____ años. Género: M <input checked="" type="checkbox"/> X F _____	Municipio: _____
Servicio: PRIVADO	Color: NEGRO	Lugar, País: Colombia	Departamento: _____
No. Motor: KC19E72017042	No. Chasis: 9FMKC	Profesión u oficio: _____	Municipio: _____
No. Serie: [DESCONOCIDO]		Dirección: 76823 CALLE 13 2 71, TORO, VALLE DEL CAUCA	Estado civil: _____
		Relación con el indiciado: _____	Teléfono: 3105054672
		B. DATOS DE LOS TESTIGOS	
		9. DILIGENCIAS ADELANTADAS	

Esto llama la atención pues el señor Belisario García Sánchez, presunto acompañante, en su declaración aseguró haber hablado directamente con las autoridades de Tránsito y de Policía que arribaron al sitio de los hechos, sin embargo, no se registró su existencia en ninguno de los documentos realizados por esas autoridades. Además, los presuntos testigos presenciales William Insuasty López y Juan de Dios Agudelo Carvajal a lo largo de su declaración se refieren únicamente al señor Alexander Zuleta Bustamante como la persona que sufrió el accidente. Es decir, no hay prueba alguna que ubique al señor Belisario García Sánchez en el día y lugar de los hechos y que respalde su declaración, la cual, además, se contradice con la versión rendida por el mismo Alexander en estrados, pues mientras el demandante manifiesta que “cayeron en un hueco profundo” y quedaron a la izquierda de la moto, el señor Belisario indica que no cayeron en un hueco, sino que la moto rebotó y Alexander cayó delante del vehículo y él hacia atrás, razones por las que la misma no resulta creíble.

Por último, cabe destacar que los señores William Insuasty López y Juan de Dios Agudelo Carvajal pretendieron dar a entender que presenciaron directamente el accidente, cuando de sus dichos se evidencia que no se encontraban próximos al señor Alexander Zuleta, pues el señor William Insuasty manifestó estar a una distancia de 12 metros del actor, y el señor Juan de Dios a 3 Kilómetros. Además, manifestaron que no tenían buena visibilidad.

Esto permite descartar a los testimonios recibidos como testigos directos del momento exacto del accidente que pretenden relacionar la presunta existencia de un hueco en la vía con el accidente padecido, cuando resulta claro que no existieron testigos presenciales de los hechos ni prueba alguna que respalde la versión esbozada en la demanda, pues, por el contrario el acervo probatorio ya referenciado evidencia de manera

concluyente que la causa del accidente fue la imprudencia e impericia del señor Alexander Zuleta Bustamante quien no contaba con las calidades necesarias para conducir motocicletas y superó el límite de velocidad con la que debía transitar en esta vía, ocasionando que perdiera el control de la motocicleta e impactara con la berma de la carretera.

Bajo esta perspectiva, es claro que estamos hablando de una situación inequívoca en la que la decisión voluntaria e irresponsable de la víctima la puso a adelantar una actividad que por naturaleza es riesgosa sin estar capacitado para ello, toda vez que incumplió las normas de tránsito al transitar sin licencia de conducción vigente, excediendo el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y sin el debido cuidado que exigen las condiciones climáticas del día de los hechos, lo que lo llevó a perder el control de la motocicleta e impactar en la berma de la carretera. En este sentido, al acreditarse una culpa exclusiva de la víctima, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probado este alegato.

2.2 SUBSIDIARIO: REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DEL DEMANDANTE EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO / CONCURRENCIA DE CULPAS

Sin perjuicio de lo anterior, sin que implique reconocimiento de la responsabilidad, en el remoto e hipotético caso que el despacho considere que la parte actora demostró los elementos que constituyen la responsabilidad en cabeza del Instituto Nacional de Vías, deberá aplicarse la respectiva reducción de la indemnización en proporción a la contribución del señor Alexander Zuleta en el accidente, quien incumplió las normas de tránsito al i) conducir sin las calidades necesarias para conducir motocicletas por no tener licencia de conducción vigente y ii) conducir a una velocidad mayor a la permitida al transitar a una velocidad mayor a 30 km/h pese a tener visibilidad reducida, circunstancias que permitieron que se concretara el daño que hoy alega la parte actora. Frente a la concurrencia de culpas, el Consejo de Estado ha establecido:

“De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se configuraba alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo. Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización. De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado”.⁵
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

En este sentido, al encontrarse acreditado con las pruebas que obran en el expediente que el señor Alexander Zuleta Bustamante tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito del 18 de mayo de 2019, en subsidio a la solicitud de declaración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, deberá declararse que el porcentaje de participación en causación del daño es mínimo del 90%, en cuanto su actuar fue imprudente al conducir pese a no tener licencia de conducción vigente y a una velocidad mayor a la permitida, de manera que, de no eximir de responsabilidad a la entidad demandada, deberá ser objeto de valoración para que se reduzca la remota condena en contra de ella.

2.3 FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE LOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE

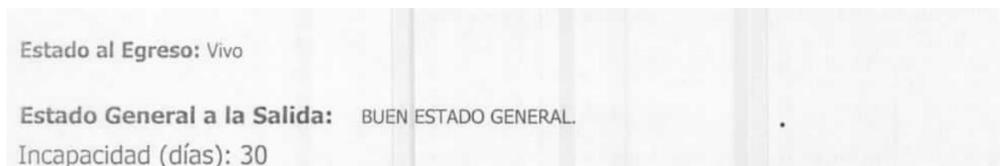
5 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Milton Chaves García. Radicación No. 2018-03357

LOS MISMOS

La parte demandante no demostró la existencia de los perjuicios materiales e inmateriales que solicita, los cuales, además, se encuentran tasados de manera exagerada en la demanda, como pasa a exponerse

Frente a los **perjuicios morales**, a parte actora solicitó a título de indemnización la suma de 100 SMLMV para el señor Alexander Zuleta Bustamante, 70 SMLMV para Cándida Rosa Hincapié, 25 SMLMV para Jimena Puerta Hincapie, 25 SMLMV para Yeison Puerta Hincapie y 50 SMLMV para Francisco Javier Zuleta Ospina. Sin embargo, los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan exorbitantes, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado, para la tasación de los perjuicios morales en caso de lesiones. Adicionalmente, no se acreditó dentro del proceso prueba alguna que acredite su causación y, además, su tasación no puede derivarse de calificaciones subjetivas por parte de los demandantes, sino que debe basarse en factores objetivos como la gravedad de la lesión sufrida, tal como lo ha determinado el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014.

En este sentido, la parte actora está solicitando como indemnización por concepto de perjuicios morales el tope máximo, cuando no acreditó dentro del proceso la gravedad de las lesiones presentadas, pues no aportó un Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral que permitiese evidenciar este aspecto, ni se acreditó que las mismas le causaran secuelas transitorias o permanentes. Únicamente obra en el plenario la Historia Clínica de atención del señor Alexander Zuleta, donde consta que al dársele de alta se encontraba en buen estado general por lo que se le otorgó una incapacidad por 30 días, lo que evidencia que, afortunadamente, las lesiones padecidas no superan el primer nivel de gravedad (Igual o superior al 1% e inferior al 10%).



Por otra parte, la jurisprudencia referida indica que para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado. Sin embargo, en el presente asunto no se acreditó la calidad en la que comparecían Cándida Rosa Hincapié, Jimena Puerta Hincapie, y Yeison Puerta Hincapie, ya que no se demostró su parentesco con el señor Alexander Zuleta Bustamante, ni tampoco que se traten de terceros afectados por los hechos que se demandan, pues al proceso no se allegaron pruebas documentales o testimoniales que respalden esta situación.

Cabe señalar que las declaraciones ante Notario rendidas por las señoras Zoraida Zuleta Bustamante Y Ana Patricia Polo Vásquez, no fueron ratificadas dentro del presente asunto, ni fueron rendidas con comparecencia de la contraparte en el proceso, por lo cual no es procedente conceder valor probatorio a las mismas. Así lo ha determinado el H. Consejo de Estado de manera consistente:

“11. La Sala no podrá conceder valor probatorio a las declaraciones extrajuicio aportadas junto con la presentación de la demanda, rendidas ante la Notaría Primera de Villavicencio por los señores Daniel Orjuela, Bernardo Segura Caicedo, Rafael Antonio Bobadilla y Nubia Carolina Merchán, las cuales tratan sobre las actividades agrícolas y comerciales del demandante y los hechos fundantes de la demanda (f. 159-164 c. 1).

11.1. **Estas declaraciones no pueden ser valoradas por la Sala y no serán tenidas en cuenta para acreditar los supuestos fácticos de la petición indemnizatoria de la parte actora, ya que su falta de ratificación al interior de este proceso y su recaudo sin presencia de la parte contra las que se pretenden hacer valer les priva de cualquier valor demostrativo.**

11.2. Estos requisitos formales provienen de una interpretación armónica de las normas procesales civiles aplicables a las declaraciones rendidas fuera de un proceso judicial con el objeto de que sean tenidas en cuenta en el mismo, especialmente las contenidas en los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil. (...)

11.6. Esto es así, porque la norma en comento establece que los documentos declarativos que provengan de terceros que se pretendan hacer valer como prueba en un proceso jurisdiccional no requieren ratificación para ser apreciados por el juez, salvo expresa solicitud de la parte contra la que se pretenda hacer valer. **Sin embargo, ello nada tiene que ver con la necesidad de ratificar declaraciones extrajuicio como las presentadas junto a la demanda en esta ocasión.**

11.7. Un adecuado análisis de esta norma revela que **en ella no se incorpora ningún cambio en las normas aplicables a las declaraciones extrajuicio para su valoración en un proceso judicial, ya que en ella el legislador fue claro en el sentido de estarse refiriendo a documentos declarativos y no a declaraciones, piezas probatorias eminentemente diferentes**, aun cuando forzosamente las declaraciones o testimonios de terceros deban estar incorporadas en un instrumento de carácter material, como el acta física levantada durante su recepción, una grabación de audio o un video conservados en forma magnética o digital.

11.7. **Las traídas con la demanda son verdaderas declaraciones rendidas por fuera de este proceso, las cuales por haber sido recibidas sin concurrencia de la contraparte requieren del requisito de la ratificación en este proceso para ser valoradas como prueba. Al no haberse hecho tal ratificación, por las razones ya enunciadas, la Sala las desestimará como elemento de convicción para resolver este caso**⁶ (Negrillas y subrayado fuera del texto original)

Por lo anterior, no es procedente que se conceda ninguna indemnización a título de perjuicios morales para ninguno de los demandantes ni mucho menos en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es a todas luces exagerada. En especial, no es procedente reconocer el perjuicio de daño moral alguno a Cándida Rosa Hincapié, Jimena Puerta Hincapie, y Yeison Puerta Hincapie en cuanto no se acreditó la calidad con la cual comparecen a este proceso de conformidad con la carga contenida en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de los artículos 211 y 306 de la ley 1437 de 2011.

Frente al **perjuicio a la vida de relación**, la parte actora solicita el reconocimiento de 50 SMLMV para la señora Cándida Rosa Hincapié. Sin embargo, el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio se encuentra subsumido en el perjuicio de daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma. **Por otra parte, el daño a la salud es reconocido únicamente a la víctima directa y no a sus familiares**, por lo que, aún de considerarse acreditado este perjuicio, el mismo no resulta procedente ya que este no fue solicitado a favor del señor Alexander Zuleta Bustamante sino únicamente de la señora Cándida Rosa Hincapié, quien no tiene la calidad de víctima directa ni acreditó la calidad por la que comparece al proceso. Por lo anterior, no es procedente reconocimiento alguno de este perjuicio ni del denominado daño a la salud.

Frente al **perjuicio de lucro cesante**, la parte demandante pretende su reconocimiento por un valor de \$7.000.000, correspondientes a los meses de trabajo de mayo y junio de 2019, manifestando que el señor Alexander Zuleta Bustamante se desempeñaba como agricultor y que devengaba un salario de \$3.500.000. Sin embargo, salta a la vista que esta cuantía carece de una liquidación objetiva y no fue acreditada en el

⁶ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejo ponente: DANIL ROJAS BETANCOURT Bogotá D.C., Tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015) Radicación No. 20001-23-31-000-2002-00136-01(32180)

asunto. Como pasa a exponerse:

El perjuicio del lucro cesante ha sido entendido como uno de naturaleza material, económico, de contenido pecuniario y que consiste en la afectación de un derecho patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir a causa del daño padecido. Por lo anterior, para que sea posible el reconocimiento del perjuicio de naturaleza económica, es necesario que se acredite su existencia cierta, actual o futura mediante elementos de convicción que permitan determinar el valor dejado de percibir. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(…) En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (…)

Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (…)

Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.”⁷

A su vez, el artículo 262 del Código General del Proceso establece que los documentos privados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido salvo que la parte contraria lo solicite.

“Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de **terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.**” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En el presente asunto, para acreditar los perjuicios reclamados, la parte actora aporta una declaración informal presuntamente firmada por el señor Paulo Cesar García, en la que manifiesta que el señor Zuleta, *“gana mensualmente tres millones quinientos mil pesos (3.500.000.00) por agricultura”*. Sin embargo, se desconoce quién es el señor García y por cuál motivo suscribió dicho documento, por lo que se solicitó su ratificación, no obstante, el señor el señor Paulo César García no compareció al asunto a ratificar su contenido, ni obra prueba documental y testimonial alguna que respalde lo contenido en el documento, por lo que no podrá ser valorado por el despacho.

Adicionalmente, el actor establece que el perjuicio solicitado corresponde al salario dejado de percibir durante los meses de mayo y junio de 2019. Sin embargo, de la historia clínica aportada con la demanda se establece que al actor únicamente le fueron concedidos 30 días de incapacidad, sin que se haya acreditado que en ese periodo hubiera dejado de percibir salario alguno durante este tiempo, pues no acreditó que para la fecha de los hechos ejerciera alguna actividad económica ni el monto que devengaba en ese sentido, motivos por los cuales dicha pretensión debe ser desestimada.

⁷ Sentencia del 24 de junio de 2008. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2000-01121-01.

3. FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En el hipotético y remoto evento en el que se considere que el despacho acceda a las infundadas pretensiones de la demanda, ruego tener en cuenta las siguientes excepciones acreditadas en el asunto:

3.1 SE ACREDITÓ LA INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 2201219006213.

Es preciso informar al despacho, que en el presente caso no asiste ninguna obligación indemnizatoria a cargo de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., respecto de la Póliza de Seguro No. 2201219006213, por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado amparado en el contrato de seguro.

En este sentido, el contrato de seguro solo entrará a operar sí y solo sí, el asegurado (Instituto Nacional de Vías) es declarado patrimonialmente responsable por los presuntos daños que alega la parte demandante, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que impida los efectos jurídicos del contrato de seguro. Es así, como la declaratoria de responsabilidad civil constituirá el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado (artículo 1072 del Código de Comercio).

En relación, el objeto pactado en la Póliza de Seguro fue el siguiente:

1. OBJETO DEL SEGURO

Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, como consecuencia de la Responsabilidad Civil Extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios dentro y fuera del territorio nacional. Nota: Se entenderán como terceros todas y cada una de las personas que circulen, ingresen, accedan o se encuentren en los predios de asegurado, independientemente que el asegurado le esté prestando un servicio objeto de su razón social.

Condición que nunca se cumplió, por lo que no existe obligación indemnizatoria a cargo de mí representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201219006213, cuya vigencia corrió desde el 16 de marzo de 2019 hasta el 17 de enero de 2020, pues la parte demandante no acreditó que el accidente presentado el día 18 de mayo de 2019 fue consecuencia de un hueco en la vía entre los Municipios de Toro y La Unión (Valle del Cauca), pues las pruebas aportadas y recaudadas no permiten evidenciar en manera alguna esta situación. Por el contrario, el acervo probatorio evidencia que la víctima conducía sin contar con licencia de conducción vigente, excediendo el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y sin el debido cuidado que exigían las condiciones climáticas.

Por lo anterior, en razón a que no se ha demostrado la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías en la causación del daño y que, en todo caso, existe una causal de exoneración de la responsabilidad, solicito señor juez se declare probada esta excepción en cuanto no le asiste ninguna obligación a la compañía aseguradora toda vez que no se ha realizado el riesgo asegurado.

3.2 SE ACREDITÓ LA FALTA DE COBERTURA MATERIAL POR LA OCURRENCIA DE LAS EXCLUSIONES PACTADAS EN LA PÓLIZA DE SEGURO No. 2201219006213

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran

expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”⁸.

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exhorta a los Jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2201219006213 contiene una serie de exclusiones, que de configurarse cualquiera exonerarán de responsabilidad a mi prohilada.

Bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones que constan en las condiciones generales y particulares de la Póliza, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

3.3 LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Sin que implique el reconocimiento de la responsabilidad, es necesario que el Juez observe las condiciones particulares y generales de la Póliza de Seguro No. 2201219006213, dado que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, que establece que el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 del mismo Código, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Para el caso concreto, el límite del valor asegurado pactado en la póliza para los casos de responsabilidad civil extracontractual es de diez mil millones de pesos m/cte (\$10.000.000.000).

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO	
P.L.O., PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 10.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	
Responsabilidad Civil patronal	\$ 10.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 705.000.000,00	\$ 1.805.000.000,00	
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 305.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00	

Dicho valor se encuentra sujeto a la reducción del deducible pactado y la disponibilidad de la suma asegurada, dado que la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando su valor por lo que, es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de mi representada.

8 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

Por lo anterior, señor juez solicito se declare probada esta excepción.

3.4 SE PROBÓ QUE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 2201219006213, EXISTE UN DEDUCIBLE QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL ASEGURADO.

Adicionalmente, y sin perjuicio de que en el presente asunto se acreditó que no hay cobertura bajo el seguro comentado, ni de los demás argumentos expuestos atrás, también debe tenerse presente que al momento de convenir los amparos en la póliza que nos ocupa, se impuso una carga al asegurado o al beneficiario en caso de siniestro, por virtud de la cual estos asumirán una parte del mismo. Esto es lo que se denomina deducible, una suma de dinero del valor del siniestro que asumirán como coparticipación en el mismo. Es por ello, que en la carátula de la póliza expedida por mi representada, se concertó un deducible el cual corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta el asegurado, y en este caso se pactó de manera específica un límite asegurado por evento equivalente a diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000), y un deducible que corresponde al veinte por ciento (20%) de la pérdida, mínimo treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes por evento:

6. DEDUCIBLES
a) PARQUEADEROS 1.9% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 0,9 SMMLV .
b) GASTOS MEDICOS SIN DEDUCIBLE.
c) EVENTOS EN CARRETERAS Y VIAS FERREAS 20% DE LA PERDIDA MÍNIMO 35 SMMLV.
d) EVENTOS NO OCURRIDOS EN CARRETERAS Y VIAS FERREAS 20% DE LA PERDIDA MÍNIMO 10 SMMLV

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia frente al tema del deducible ha dicho:

“Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.

En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado “...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño”.

Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares pactadas en la

póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre otros factores.”⁹ (Negrilla y Subrayado fuera del texto)

Por lo anterior, al momento de proferir decisión y en el remoto e hipotético caso de acceder a las pretensiones de la demanda por acreditarse la responsabilidad en cabeza de la asegurada, deben tenerse en cuenta cada una de las condiciones establecidas en la póliza en comento, haciendo hincapié en la suma amparada mediante el contrato y al deducible pactado en el mismo y en el remoto evento de que se llegare a hacer efectivo el llamamiento en garantía es menester aplicar todas y cada una de las cláusulas y condiciones del contrato de seguro.

3.5 DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

3.6 CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Un principio que rige el contrato de seguro de daños es el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. Siendo así, la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

Por lo anterior, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el beneficiario con el pago de la indemnización.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia No. 5065 del 22 de julio de 1999 estableció:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.¹⁰ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente: ***“respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él***

⁹ Concepto 2019098264 ago. 29/2019, Superintendencia Financiera de Colombia.

¹⁰ Sentencia No. 5065. (22 de julio de 1999). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Nicolás Buitrago Simancas.

f fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las pretensiones de la parte actora no son de recibo por cuanto su reconocimiento implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo un pago por parte del asegurado que no tiene origen en una obligación legal o contractual.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y eventualmente enriqueciendo a la parte actora.

3.7 EN TODO CASO DEBERÁ TENERSE EN CUENTA LA INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE EL DEMANDADO Y LA ASEGURADORA

Frente a esta excepción es preciso afirmar que la solidaridad surge exclusivamente cuando la ley o la convención la establecen, en el caso en concreto, la fuente de las obligaciones de mi representada está contenida en el contrato de seguro, y en este, no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante insistir sobre el particular por cuanto la obligación de mí representada tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de la responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme a lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto, nos encontramos frente a dos responsabilidades diferentes a saber:

- i) La del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegará a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley.
- ii) La de mi representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado; constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, mediante sentencia SC20950-2017¹¹ ha indicado que: *“la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual, que*

¹¹ Sentencia SC-20950-2017. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Radicación No. 005-2008-00497-01. **APCM**

favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co.”

Por lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se origina por pacto expreso entre las partes del contrato, de conformidad con el artículo 1568 del Código Civil que establece:

“ARTICULO 1568. <DEFINICION DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS>. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.” (Negrilla y Subrayado fuera del texto)

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora a proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual, puede alegar mi representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia, cuantía del siniestro, las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

En consecuencia, debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite y sublímite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado.

3.8 PAGO POR REEMBOLSO

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable operador judicial que, en el improbable caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena. Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, sino por reembolso o reintegro.

V. SOLICITUD

De conformidad con lo expuesto en precedencia, solicito al Juzgado Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Cartago:

PRIMERO: Se sirva **DENEGAR** la totalidad de las pretensiones de la demanda incoada por el señor ALEXANDER ZULETA BUSTAMANTE Y OTROS ante la inexistencia de los elementos necesarios para declarar la responsabilidad extracontractual de la demandada en el proceso de la referencia y la configuración de la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

SEGUNDO: De manera subsidiaria, y en el remoto e hipotético caso que se considere acceder a las pretensiones de la demanda, ruego que se tome en consideración todas y cada una de las excepciones y argumentos planteados desde la contestación de la demanda y el llamamiento en garantía y por ende se declare la inexistencia de la obligación legal o contractual de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., de asumir las consecuencias de una eventual sentencia proferida por este despacho. Además, que no pierda de vista, las exclusiones, el valor del límite asegurado, sublímites, coaseguros y deducibles.

TERCERO: Así mismo, de manera subsidiaria, y en el remoto e hipotético caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna remota obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente solicito imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes.

No siendo otro el motivo de la presente,

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.